



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚMERO: ***

ACTOR: ***

AUTORIDAD DEMANDADA: "PROACTIVA
MEDIO AMBIENTE CAASA", S.A. DE C.V.

TERCERA INTERESADA: COMISIÓN
CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Aguascalientes, a catorce de
septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS, para resolver, los autos del juicio de
nulidad número ***.

RESULTANDO

I. Mediante escrito presentado el *tres de mayo de
dos mil diecisiete* en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del
Estado, remitido a esta Sala al día hábil siguiente, *** demandó de
la concesionaria "PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA", S.A.
de C.V., la nulidad del acto administrativo que precisó en los
siguientes términos.

"... ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO"

*La ilegalidad de los actos administrativos
consistentes en el pago de los recibos números:
67341568; 67341688; 67341685; 67341684; 67341549;
67341687; 67341590; 67341569; 6734155; emitidos por la
persona moral denominada Proactiva Medio Ambiente
CAASA, S.A. DE C.V., quien funge como concesionaria (y
por ende autoridad) del servicio público de agua potable
dentro del Municipio de Aguascalientes, pagados todos el
día 29 de marzo de 2017, tendiendo fecha de emisión el
día 14 de marzo de 2017. Por todos los recibos antes
mencionados se pagó la cantidad total de: \$16,265.00,
cantidad que, en caso de lograr la nulidad solicito se
ordene a la autoridad sea devuelta a la actora."*

Así mismo la parte actora oferto las pruebas que consideró necesarias a fin de acreditar la acción de nulidad de los actos administrativos que describe.

II. Mediante auto de fecha *cinco de junio de dos mil diecisiete*, fue admitida a trámite la demanda interpuesta, se recibieron las pruebas ofrecidas y se ordenó emplazar a la concesionaria demandada y a la tercera interesada Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes [C C A P A M A].

III. Según proveído de fecha *diez de julio de dos mil diecisiete*, se admitieron las contestaciones de demanda realizadas por la Concesionaria demandada, así como por la tercera llamada a juicio, en donde fueron admitidas las pruebas ofertadas por éstas y se ordenó correr traslado a la parte actora a fin de que realizará su ampliación de demanda.

IV. Previa ampliación y su contestación, por auto de fecha *veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete* se señaló fecha para la audiencia de juicio.

V. La audiencia de juicio fue celebrada el *diez de octubre de dos mil diecisiete*, en donde se desahogaron las pruebas admitidas a las partes, se abrió y agotó el periodo de alegatos, para luego citar el asunto para sentencia definitiva, la cual fue reservada al haber interpuesto la concesionaria demandada amparo directo en contra de la interlocutoria que resolviera el recurso de reclamación interpuesto por la concesionaria demandada en contra del auto que admitió la demanda.

VI. Mediante auto de fecha *dieciocho de julio de dos mil dieciocho* se ordeno turnar los autos del expediente que nos ocupa para el dictado de la sentencia definitiva, ya que fue



sobreseído el amparo directo que interpusiera la concesionaria, por lo que se procede al dictado de la misma, bajo los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S :

PRIMERO. Esta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, es competente para conocer y resolver del presente juicio, conforme a los artículos 51, segundo párrafo, y 52, último párrafo, de la Constitución Local; 33 A, y 33 F, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; 1, primer párrafo, y 2, fracción I, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, toda vez que se impugnan resoluciones administrativas emitidas por la concesionaria de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado o saneamiento y su uso en el Municipio de Aguascalientes, actuando como autoridad.

SEGUNDO. La existencia de los actos administrativos impugnados, se acredita con los recibos números 67341568, 67341688, 67341685, 67341684, 67341549, 67341687, 67341590, 67341569 y 6734155 emitidos por la concesionaria "Proactiva Medio Ambiente C.A.S.A", S.A. de C.V., el día catorce de marzo de dos mil diecisiete, los constan de fojas quince a la veintitrés de los autos.

Resoluciones que en conjunto reclaman a la parte actora el pago de la cantidad total de \$16,265.00 (DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), advirtiéndose en cada uno de los recibos en cuestión un mes de adeudo respecto del servicio de agua potable que se suministra en los inmuebles que a continuación se describen:

Respecto de seis inmuebles respecto a los recibos números 67341550, 67341549, 67341688, 6741687, 67341684 y 67341685, se encuentran ubicados en la calle ***.

En cuanto a los **dos** inmuebles que se refieren en los recibos números 67341568 y 67341569, se encuentran ubicados en la calle ***.

Por último en cuanto al inmueble que se desprende del recibo 67341590, se encuentra ubicado en la ***.

Inmuebles que pertenecen a la ***, de ésta ciudad de Aguascalientes.

Teniendo como cuentas números ***, respectivamente, desprendiéndose que el último mes facturado es febrero de dos mil diecisiete (M-02-2017).

Probanzas que al provenir de las partes y sin que exista objeción alguna, merecen valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en los artículos 335, 341 y 352 del Código de Procedimientos Civiles, del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, según su numeral 47.

TERCERO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.

La concesionaria demandada afirma que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 26, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, toda vez que esta Sala Administrativa es incompetente para conocer del presente asunto, esto dice: a) porque el recibo de pago impugnado no lo realizó en funciones de autoridad, y b) porque la naturaleza de la controversia no es administrativa ni fiscal, sino mercantil.

Refiere que los recibos de pago no los emite en funciones de autoridad, porque si bien es prestador del servicio público de agua potable en virtud de la concesión que le fue otorgada por el Municipio de Aguascalientes, lo cierto es que la relación jurídica que tiene con el usuario deriva de una relación contractual — contrato de suministro —, por lo que su relación es



de coordinación y no de supra a subordinación, razón por la que no se encuentra actuando en funciones de autoridad.

Bajo esa premisa, refiere que el requerimiento de pago no es un acto de autoridad, dado que no proviene de una relación de supra a subordinación, ni se emite de manera unilateral por parte de la concesionara, sino que tiene como base el incumplimiento a la obligación de pago derivada del contrato de suministro que celebró con el usuario, en una relación de coordinación.

Como sustento de su afirmación, invoca la tesis de jurisprudencia número P./J. 92/2001, de la novena época, con número de registro: 16353, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR."

Agrega que conforme a lo previsto en los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, la naturaleza de la controversia derivada del suministro de agua potable no es administrativa ni fiscal, sino mercantil, por lo que cualquier controversia suscitada entre las partes derivadas de ese tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, de conformidad con el numeral 104, fracción II, constitucional.

Como sustento de su afirmación, invoca las siguientes tesis aisladas 2a. XLII/2015 (10a.) — con número de registro: 2009790— y 2a. CIX/2013 (10a.) — con número de

registro: 2005149 — , ambas de la décima época, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro indican, respectivamente:

“COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].”

“CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADAS CON ÉSTE SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL.”

Esta Sala Administrativa resolvió en pleno mediante interlocutoria de *tres de julio de dos mil diecisiete*, que no se actualizan las citadas causales de improcedencia, por lo que ya fueron motivo de decisión de este órgano jurisdiccional y por tanto existe cosa juzgada entorno a ello.

En efecto, por virtud de la institución de la cosa juzgada, los temas definidos por un órgano jurisdiccional en una resolución contra la que no procede medio de defensa ordinario alguno no son susceptibles de modificarse, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica.

En la especie, el recurso de reclamación fue interpuesto contra el auto de admisión de demanda, en tal medio de defensa esta Sala definió en Pleno, que no se configuraban los motivos de improcedencia expuestos por la concesionaria demandada, de lo que se sigue, que tal determinación constituye cosa juzgada y, por ende, las invocadas causales ya fueron examinadas.

En la inteligencia de que no impide llegar a esta conclusión la circunstancia de que los argumentos por los que la demandada concluya se actualizan las causales de



improcedencia no sean exactamente iguales, pues mientras exista identidad temática prevalece el principio de cosa juzgada.

CUARTO. En virtud de que no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia invocadas por la demandada, ni esta Sala advierte que se actualice alguna de oficio, lo que procede es estudiar los conceptos de nulidad que hace valer la accionante, los que por economía procesal no se transcriben, aunado a que no es un requisito formal de las sentencias.

Del mismo modo, se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, las defensas opuestas por la demandada, sin que puedan ser tomados en cuenta los motivos y fundamentos legales para la emisión del acto impugnado que no hayan sido invocados en éste de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado.

QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD.

La parte actora en el concepto de nulidad PRIMERO, inciso A), del escrito de demanda, argumenta esencialmente que resultan ilegales las resoluciones impugnadas, ya que se encuentran basadas en cuotas o tarifas que no fueron publicadas tanto en el Periódico Oficial del Estado en uno de mayor circulación en el Estado, como lo exige el artículo 101 de la Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes.

Concepto de nulidad que es **FUNDADO**, siendo preferente su análisis, por ser el que mayor protección brinda al actor.

De una interpretación sistemática e integral de los artículos 3°, fracción XIII, 23, 25, fracción II, 27, fracción I, 29, fracción III, 34, fracción IV y 101 de la Ley de Agua para el Estado

de Aguascalientes; 3, 6, fracción XII, y 16, fracción III, del Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, se obtiene que:

1. El prestador de los servicios, en este caso, la concesionaria PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA, S.A. de C.V., **aplicará para los cobros de los servicios** de agua potable, alcantarillado y saneamiento **las cuotas y tarifas** que al respecto autorice el Consejo Directivo del organismo operador municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes — CCAPAMA — .

2. Cuotas y tarifas, que para su eficacia, el Director General del citado organismo operador municipal, **deberá publicar** en el **Periódico Oficial del Estado** y en uno de los **diarios de mayor circulación en la entidad** .

Luego, la concesionaria Proactiva Medio Ambiente para determinar la cantidad a pagar por parte de los usuarios, necesariamente deberá tener como base las tarifas y cuotas autorizadas y publicitadas en los términos que lo exige la norma; circunstancia que en la especie no acontece.

Afirmación que se hace, ya que la concesionaria **no demostró** que haya efectuado las publicaciones en la forma que son exigidas dentro de los medios de comunicación indicados, toda vez que no exhibió las publicaciones tanto del **PERIÓDICO OFICIAL** así como la correspondiente a un **DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ESTADO**, puesto que si bien pretende dar cumplimiento respecto a la correspondiente a el primer medio de comunicación señalando dentro de su escrito de contestación a la demanda diversas fechas de publicación de dicho medio, ninguna corresponde al mes facturado en los recibos impugnados, sin que



tampoco haya exhibido copia de dicha publicación, ya que las exhibidas no corresponden al mes de febrero de dos mil diecisiete; ahora bien, por lo que ve a las publicaciones del segundo medio de comunicación, la parte actora exhibió copias simples de diversas publicaciones de ese medio, sin embargo ninguna corresponde al mes en cuestión, además se tratan de copias simples sin valor alguno. Por todo lo que se presume la inexistencia de las publicaciones de los dos medios de comunicación que ordena la norma. Es así, porque dentro de la clasificación de los actos se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. De manera que, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad.

En este caso, el acto negativo que se le atribuye a la concesionaria, versa exclusivamente en que basa su resolución en tarifas que no han sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en la entidad; de manera que, a fin de desvirtuar el hecho negativo que se le atribuye, estaba obligada a exhibir la publicación de todas las cuotas o tarifas que sirvieron de base para la determinación del monto a pagar por parte del usuario. Esto, porque la negativa simple de los actos por parte del actor, la libera de la necesidad de probarlos, pues lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado, de tal suerte que la carga de probar recae en la concesionaria, porque la determinación del adeudo es un hecho que se le imputa de manera directa, por ser ella la facultada para aplicar las cuotas o tarifas legalmente válidas; de lo que se sigue que, estaba obligada conforme al artículo 35, primer párrafo, *in fine*, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de

Aguascalientes, no solo a contestar ese hecho, sino a probar la razón de su respuesta, sin que así lo hubiere hecho como ya se dijo, lo que se sustenta en la jurisprudencia de rubro y texto:

CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD CUANDO LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS AFIRMACIONES SOBRE LA ILEGALIDAD DE SUS ACTUACIONES OBREN EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE AQUÉLLA CONSERVA EN CUSTODIA. El artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de nulidad, establece que el actor está obligado a probar los hechos constitutivos de su acción. Sin embargo, en el ámbito del derecho administrativo opera un principio de excepción que obliga a la autoridad a desvirtuar, inclusive, las afirmaciones sobre la ilegalidad de sus actuaciones que no estén debidamente acreditadas mediante el acompañamiento en autos de los documentos que las contengan, cuando éstos obren en los expedientes administrativos que aquélla conserva en custodia.

Así como la tesis aislada VI.1o 2301, octava época, con número de registro: 208122, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente:

“ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables.”

Al no haber demostrado la concesionaria que las tarifas o cuotas que tomó como base para determinar las cantidades a pagar por parte del usuario, se hubiesen publicado en un periódico de mayor circulación en la entidad, como lo exige la norma, dado que las que exhibe se trata de copias simples que no tiene valor probatorio pleno, lo que procede es declarar la **nulidad lisa y llana** del acto impugnado.



No obsta para lo anterior, lo expuesto por Proactiva Medio Ambiente en su contestación de demanda, en el sentido de que la publicación de las cuotas o tarifas no le corresponde a ella, por lo que no está obligada a demostrar la existencia de dichas publicaciones, pues de acuerdo a la Ley de Agua para el Estado, es la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes la facultada para determinar y aprobar las tarifas o cuotas que los usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado deben de pagar, y por ende, el obligado en publicarlas.

Ello es así, porque la concesionaria pasa por alto que el argumento en análisis no versa en quién es la facultada para determinar y aprobar las tarifas que los usuarios de agua potable deben de pagar, y por ende, quien tiene la obligación de hacer la publicación de dichas cuotas; sino si el acto impugnado fue emitido o no con base en una tarifa que se haya publicado en términos de Ley.

Luego, si la concesionaria es quien determina la cantidad a pagar por parte del usuario, con base a las cuotas o tarifas autorizadas y publicadas por el organismo operador municipal; se concluye que, necesariamente está obligada a conocer y exhibir cuando sea requerida para ello, la publicación de las cuotas o tarifas que tomó como base para el dictado de su resolución.

Sin que se haga necesario el estudio de los restantes conceptos de nulidad que hiciera valer la parte actora del escrito de demanda así como de los que hace valer en el escrito de ampliación de demanda, ya que en nada variaría el sentido de la presente resolución, aunado a que se declaró fundado el concepto en estudio.

SEPTO. Por lo anterior y al ser FUNDADO el concepto de nulidad PRIMERO, inciso A), del escrito de demanda, según las consideraciones expuestas en el considerando que antecede, se actualiza la causal de anulación prevista en el artículo 61, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado, por lo que con fundamento en el diverso numeral 62, fracción II de ese mismo cuerpo de leyes, se declara la NULIDAD LISA Y LLANA de las determinaciones que se encuentran contenidas en los nueve recibos cuyos números son 67341568, 67341688, 67341685, 67341684, 67341549, 67341687, 67341590, 67341569 y 6734155 emitidos por la concesionaria "Proactiva Medio Ambiente CAASA", S.A. de C.V., el día *catorce de marzo de dos mil dieciséis*, visibles de fojas la *quince a la veintitrés* de los autos.

Resoluciones que en conjunto reclaman a la **parte actora** el pago de la cantidad total de \$16,265.00 (DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), **advirtiéndose en cada uno de los recibos en cuestión un mes de adeudo** del servicio de agua potable que se suministra en los inmuebles que a continuación se describen:

Respecto a los **seis** inmuebles que se refieren en los recibos de números 67341550, 67341549, 67341688, 67341687, 67341684 y 67341685, se encuentran ubicados en la calle ***.

En cuanto a los **dos** inmuebles que se refieren en los recibos números 67341568 y 67341569, se encuentran ubicados en la calle ***.

Por último en cuanto al inmueble que se desprende del recibo 67341590, se encuentra ubicado en la ***.

Inmuebles que pertenecen a la ***, de ésta ciudad de Aguascalientes, y se desprende que el último mes facturado de



cada uno lo fue febrero de dos mil diecisiete (M-02-2017).

Teniendo como cuentas las número ***, respectivamente, siendo el último mes facturado en cada uno de los recibos en cuestión febrero de dos mil diecisiete (M-02-2017).

Como consecuencia de lo anterior y con fundamento en el artículo 63 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, que dispone que se deberá restituir a la parte actora en los derechos que le hubieren sido afectados con motivo de la nulidad decretada respecto al recibo impugnado, por lo que **se ordena** a la demandada **PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA, S.A. DE C.V.**, conforme al trámite legal que corresponda, proceda a **devolver** a la parte actora la cantidad total de \$16,265.00 (DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) que por concepto de pago de los **nueve** recibos impugnados efectuara, lo que se acredita de la impresión que realizará en la parte posterior de cada uno de los recibo en cuestión la concesionaria demandada según se aprecia de la parte posterior de las fojas *quince a la veintitré* de los autos.

Dejándose a **disposición de la concesionaria demandada**, los comprobantes en cuestión, a fin de que conforme al trámite legal que corresponda, le restituya a la parte actora la cantidad total que amparan los **nueve** recibos que fueron declarados nulos.

Por las razones que se informan en este fallo, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61, fracción II, y 62, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, se resuelve:

PRIMERO. Es procedente la acción ejercida por el actor.

SEGUNDO. Se declara la NULIDAD LISA Y LLANA de las determinaciones contenidas en los recibos números **67341568, 67341688, 67341685, 67341684, 67341549, 67341687, 67341590, 67341569 y 6734155** emitidos por la concesionaria "Proactiva Medio Ambiente CAASA", S.A. de C.V., el día *catorce de marzo de dos mil diecisiete*, los constan de fojas *quince a la veintitres* de los autos.

TERCERO. Se ordena a la concesionaria demandada **PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA, S.A. DE C.V.** previo los trámites respectivos, haga devolución a la **parte actora** de la cantidad total de **\$16,265.00 (DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)**, siguiendo los lineamientos precisados en el considerando **SEXTO** de la presente sentencia.

CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así lo resolvió ésta Sala Administrativa del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos de los **MAGISTRADOS ENRIQUE FRANCO MENDOZA, RIGOBERTO ALONSO DELGADO Y ALFONSO ROMÁN QUEROZ**, siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes conjuntamente firman ante la licenciada **María Hilda Salazar Magallanes**, Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

La resolución anterior se publicó en lista de acuerdos de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho.
Conste.-

..



PODER JUDICIAL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

SALA ADMINISTRATIVA

SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
SENTENCIA DEFINITIVA
EXPEDIENTE: 0966/2017

La C. Secretaria General de Acuerdos de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado LIC. MARÍA HILDA SALAZAR MAGALLANES:

C E R T I F I C A

Que la presente impresión contenida en **quince** páginas útiles de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número *****, promovido por ******* en contra de **PROACTIVA MEDIO AMBIENTE CAASA y COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**, concuerda fielmente con la sentencia original que obra en dicho expediente y que se encuentra firmada por los Magistrados que integran éste órgano jurisdiccional así como por la suscrita, las que se certifican a fin de notificar a las partes, a los **catorce días del mes de septiembre de dos mil dieciocho**.- Doy fe.-

LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DE
LA SALA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

LIC. MARÍA HILDA SALAZAR MAGALLANES.